

El conflicto armado y las diferentes formas de violencia se relacionan directamente con las percepciones de inseguridad, las formas de producción y asociación, y la confianza de los líderes de las unidades productivas rurales. Factores ajenos a la violencia también inciden en esta propensión a asociarse: fallas de mercado, de coordinación y de gobierno, y la distribución desigual de la tierra. Estos resultados, validados en reuniones con los productores rurales encuestados, plantean la importancia de adelantar políticas de desarrollo rural diferenciadas por región, considerando el carácter dinámico de las comunidades rurales, que está fuertemente relacionado con su actividad económica. Así mismo, el fortalecimiento de los recursos colectivos de las comunidades es fundamental en su desarrollo y el papel de los subsidios individuales debe ser reconsiderado.

Acerca del estudio

El estudio busca comprender las relaciones entre la inseguridad percibida por los productores rurales y su asociatividad económica y social. Fue motivado por el escenario de posconflicto que comenzó a gestarse en Colombia posterior al 2007, cuando ocurrió la primera fase del estudio (Orozco, Forero-Pineda y Wills-Herrera, 2013). El trabajo de campo de la segunda fase se desarrolló en el segundo semestre del 2015, encuestando a 1.680 productores en 168 veredas de 8 regiones colombianas¹.

Acerca de los autores

Manuel Moscoso Rojas tiene una Maestría en Economía, de la Pontificia Universidad Javeriana. Es asesor de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación.

Luz Elena Orozco Collazos es Ph. D. en Administración de Tulane University. Es profesora asistente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Clemente Forero Pineda es Ph. D. en Economía de Stanford University. Es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Eduardo Wills Herrera es Ph. D. en Administración de Tulane University. Es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Asociatividad e inseguridad rural: oportunidades y retos para la construcción de capital social en el posconflicto

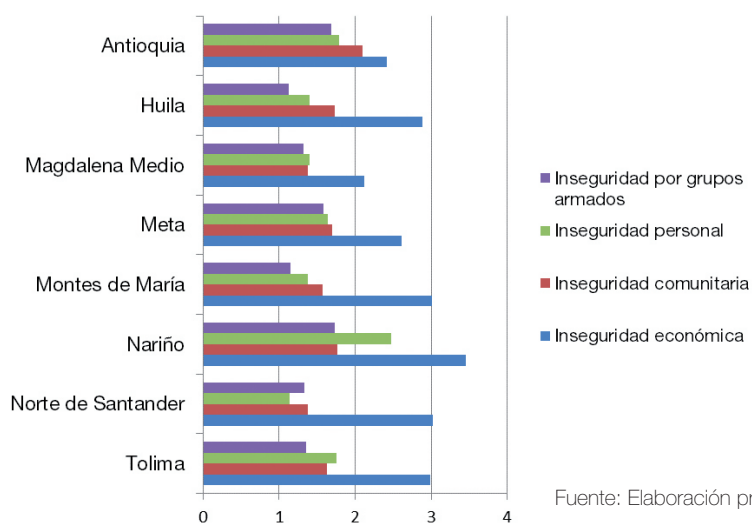
Manuel Moscoso, Luz Elena Orozco, Clemente Forero, Eduardo Wills

1. La percepción de inseguridad de los habitantes rurales

Una premisa del estudio es que la seguridad es un bien público que debe ser comprendido fuera del enfoque que lo restringe a lo militar y al orden público. Este concepto involucra elementos que condicionan las potencialidades de los individuos y depende del contexto en donde residen los habitantes rurales (Wills et al., 2013). En consecuencia, la percepción de inseguridad resulta de la interpretación que hacen los individuos del conflicto social, del entorno violento en el que habitan y de la manera como internalizan las distintas amenazas a su seguridad.

Un conjunto de indicadores de percepción de inseguridad se consolidó a partir de las dos fases del estudio. Las inseguridades económica, personal, comunitaria y la relacionada con la presencia de grupos armados al margen de la ley emergieron en el 2015, con la inseguridad económica como la de mayor importancia en todas las regiones (véase gráfica 1). Esta inseguridad se materializa en la posibilidad de no alcanzar ingresos suficientes y un adecuado nivel de calidad de vida.

Gráfica 1. Índices de inseguridad promedio por las regiones de estudio



Fuente: Elaboración propia.

¹ El estudio fue financiado mediante el Convenio Interadministrativo 533 entre el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad de los Andes.

Aunque la inseguridad asociada al conflicto armado tuvo los más bajos niveles debido a la disminución de los hechos de violencia, persiste el temor por la seguridad en las comunidades, relacionada con el grado de solidaridad y confianza entre los vecinos. Es particularmente relevante el caso de Nariño, donde la inseguridad personal, respecto al riesgo de perder la vida, continuaba siendo importante.

A partir de la socialización de los resultados se evidencia que reconstruir el tejido social de las comunidades requiere periodos de tiempo más amplios, además de intervenciones que apoyen esta construcción, en programas similares a los que se tienen para la población reinsertada. Los estudios permitieron observar que el tratamiento diferenciado no contribuye al fortalecimiento del tejido social en las comunidades rurales.

1.1 Cambios de la percepción de inseguridad entre 2007 y 2015

Al comparar las dos fases del proyecto se observan tendencias opuestas, relacionadas con el proceso de transformación de la violencia en Colombia durante los últimos diez años: la intensidad del conflicto se redujo y los delitos atribuidos al crimen organizado se incrementaron sustancialmente. También, las inseguridades personal y política atribuibles a la presencia de grupos armados al margen de la ley eran, en el 2007, la mayor preocupación de los habitantes rurales. En contraste, la percepción de inseguridad económica era relativamente baja en el 2007.

Varios elementos explican los cambios en la inseguridad económica. Por un lado, la migración de jóvenes hacia la ciudad y su interés en actividades no relacionadas con el agro fueron preocupaciones recurrentes. Así mismo, los productores con mayor nivel de educación planteaban que sus expectativas de ingreso no se satisfacían con la actividad económica rural, por lo que percibían una mayor inseguridad económica. La limitada disponibilidad de recursos tecnológicos para la producción constituye un tercer elemento. Estas limitaciones de recursos eran mucho más fuertes entre los productores que se encontraban participando en programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Estos hallazgos sugieren que la tecnificación del sector rural debe estar ligada a la educación de su población para fortalecer sus capacidades de agregación de valor a la producción y volver atractiva la permanencia de la población en las zonas rurales. Además, es importante fortalecer los programas de sustitución de cultivos. El apoyo a los productores, que puede incluir subsidios no debe limitarse a ellos y debe generar compromisos de desarrollo de cultivos en el mediano y/o largo plazo. Por ende, se plantea una disminución gradual del apoyo al tiempo que aumenta la autonomía de los productores, con el objetivo de impulsar las economías locales de acuerdo con sus propias dinámicas.

2. Heterogeneidad del capital social

El capital social es una variable multidimensional que incluye confianza, reciprocidad en las relaciones sociales y pertenencia a organizaciones sociales de distintos tipos (capital relacional). En el marco del proyecto se construyeron cuatro indicadores de capital relacional: índice de participación en grupos sociales o instancias locales, índice de capital social de corto alcance (participación en la junta de acción comunal, la asociación de vecinos, de padres de familia y a equipos deportivos), índice de capital relacional con proyección a políticas públicas (participación en asociaciones de usuarios, desarrollo rural y veedurías ciudadanas) e índice de capital relacional con orientación al

servicio (participación en asociaciones de madres comunitarias, asociación de mujeres y a comunidades religiosas). Estos índices muestran la enorme heterogeneidad de la organización social en los territorios. La alta participación de los habitantes del Magdalena Medio en organizaciones sociales contrasta con una muy baja en Norte de Santander y Montes de María. La mayor participación en asociaciones se relaciona positivamente con el bienestar subjetivo personal y comunitario.

Las variables municipales de la unidad productiva y del productor explican el capital relacional de cada productor. La distancia a la cabecera municipal y el tamaño de la unidad productiva, el ingreso del productor, su nivel de educación y género tienen una importante influencia en la conformación del capital relacional (Wills y Rodríguez, 2017).

Teniendo en cuenta la diversidad en el capital relacional (Ostrom y Ahn, 2003) de los productores y sus niveles de percepción de inseguridad, las regiones se agrupan de acuerdo con la tipología detallada en la tabla 1.

Tabla 1. Tipología de la asociatividad y la inseguridad

	Bajo nivel de participación en grupos sociales	Alto nivel de participación en grupos sociales
Baja percepción de inseguridad	Economías de enclave (Montes de María, Magdalena Medio y Norte de Santander)	Apoyo institucional y confianza comunitaria (Norte de Santander y Antioquia)
Alta percepción de inseguridad	Economía campesina deprimida (Norte de Nariño y Tolima)	Economía campesina (Nariño, Magdalena Medio y Meta)

Fuente: Forero, C., Orozco, L. E., & Wills, E. (2015). Proyecto "Inseguridad y Formas Organizativas". Informe de Trabajo.

Esta tipología permite evidenciar dinámicas rurales diferenciadas regionalmente en términos tanto sociales como económicos. De acuerdo con esta tipología y con el levantamiento de casos, las economías campesinas deprimidas son las que requieren un mayor esfuerzo en el desarrollo de recursos productivos, mientras que en las economías de enclave el esfuerzo debe enfocarse en una mayor autonomía productiva y comercial de los productores rurales.

De esta forma, las políticas de posconflicto deben diferenciarse por región, considerando la transformación de las dinámicas sociales de la población rural. Al igual que la violencia objetiva, la inseguridad subjetiva debe ser objeto de políticas públicas pues también incide directamente en el desarrollo rural.

2.1. Inseguridad subjetiva, capital social y acción colectiva

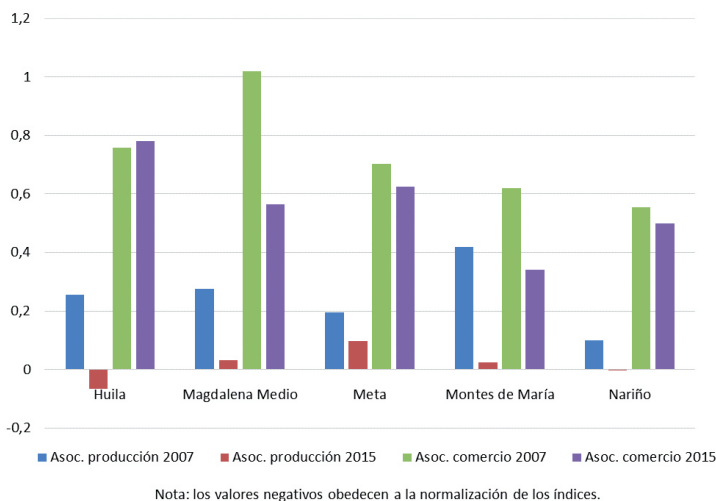
El capital social se materializa en la participación de los individuos y sus familias en grupos u organizaciones que contribuyen no solo a la generación de bienestar de la comunidad sino también al fortalecimiento de las bases para la construcción de relaciones económicas y sociales de la comunidad. Adoptando la conceptualización de Ostrom et al. (2003), la investigación muestra que la inseguridad subjetiva afecta negativamente los tres componentes del capital social (capital relacional, confianza y reciprocidad, capital institucional). A su vez, el capital institucional y la confianza favorecen la acción colectiva, pero, coincidiendo con otros estudios internacionales, el capital relacional de las personas no tiene un efecto significativo sobre la acción colectiva en estas regiones (Forero, Orozco y Valenzuela, 2017).

3. Asociatividad económica rural

La asociatividad económica hace referencia a organizaciones formales o informales conformadas por productores individuales y sus familiares, quienes utilizan diversos mecanismos de asociación alrededor de los factores de producción y comercialización de la unidad productiva rural (Forero et al., 2014). Estos conceptos son abordados con el propósito de identificar cómo se ve afectado el relacionamiento entre organizaciones económicas por las percepciones de inseguridad. Para ello, estas relaciones económicas se dividen en dos: las formas organizativas para producir y las formas organizativas para comercializar. En el análisis de la asociatividad económica se adoptan los conceptos de formas híbridas de organización (Menard, 2006).

El estudio del 2015 mostró que los niveles de asociatividad económica rural (en producción y en comercio) disminuyeron en comparación con los índices en la primera fase del estudio (véase gráfica 2). La asociatividad en producción es baja con un índice promedio máximo de 0,096 para el departamento del Meta, mientras que en otras regiones estos tienden a ser nulos. Por otra parte, la asociatividad en comercio sigue siendo relevante en la dinámica de los productores rurales, pero con niveles menores a los encontrados en el 2007 con excepción del departamento del Huila.

Gráfica 2. Cambios en la asociatividad económica por región y año de estudio



Fuente: Elaboración propia.

La inseguridad asociada con la presencia de grupos armados afecta la asociatividad en la producción y la inseguridad comunitaria disminuye la asociatividad en la comercialización. Estos resultados corroboran los hallazgos de la primera fase del proyecto (Forero et al., 2017), cuyo principal argumento era que la asociatividad es un mecanismo de adaptación eficiente en respuesta a la violencia e inseguridad. Por otro lado, el capital relacional también resulta ser un predictor importante de la asociatividad en comercialización, no en producción.

De aquí se deriva que el acompañamiento a las unidades productivas rurales debe proveer instrumentos que fortalezcan su capacidad de asociatividad como uno de los elementos que a su vez les permiten integrarse al mercado.

3.1. Casos exitosos de asociatividad en zonas afectadas por el conflicto armado

Diez estudios de caso de organizaciones asociativas permiten ilustrar los retos que representa la asociatividad para las unidades productivas agropecuarias (Gómez et al., 2015). De acuerdo con estos casos, los procesos de asociación en zonas con fuertes secuelas de la guerra y con dependencia de la producción de cultivos ilícitos requieren un apoyo inicial de asistencia técnica por parte del Gobierno nacional o de la cooperación internacional para ser viables. Parte del éxito de las unidades productivas se sustenta en su fortalecimiento tecnológico y organizativo interno, que le garantizan al campesino la capacidad de producir un bien transable en el mercado.

Los casos también mostraron el importante papel de la mujer en las unidades productivas rurales y principalmente como líderes de la transformación social y económica de las regiones afectadas por la violencia. Estos casos confirman el papel de la mujer rural como “aglutinadora” de la comunidad, y que constituye un recurso fundamental en la recuperación del tejido social y del aparato productivo de estas comunidades.

4. Presencia de mesoorganizaciones e integración al mercado

Las mesoorganizaciones son organizaciones privadas o gubernamentales que promueven el desarrollo social y económico. En el estudio, su enfoque estaba en las comunidades rurales. Su presencia es impulsada por el Estado, por ONG y por las propias comunidades, principalmente en las zonas catalogadas como violentas. Por ejemplo, algunas fundaciones en Antioquia y el SENA cuentan con programas de desarrollo de tecnologías de producción y de fortalecimiento de capacidades organizativas de los productores rurales.

Las comunidades rurales perciben tres tipos de beneficios de estas mesoorganizaciones: fortalecimiento de las capacidades productivas, fortalecimiento de las relaciones comerciales y subsidios económicos para la producción rural. Solo los dos primeros están directamente relacionados con la efectiva integración al mercado de los productores rurales. La integración al mercado es el proceso mediante el cual los productores rurales avanzan en el logro de un retorno de excedentes para sus productos en forma sostenible (Bingen, 2003). El otorgamiento de subsidios parece cubrir las necesidades de corto plazo de la población rural, pero no permite el desarrollo de capacidades productivas o comerciales que garanticen la continuidad de los ciclos de producción (Orozco y Forero-Pineda, 2017).

La presencia de mesoorganizaciones en las zonas rurales está ligada al fortalecimiento del capital institucional, el cual es fundamental para la acción colectiva de los productores. De acuerdo con los resultados del estudio, sus programas de intervención deben enfocarse en favorecer las capacidades productivas, asociativas y relacionales de los campesinos. Estos programas son preferibles a los subsidios, pues aseguran la integración sostenible al mercado.

Referencias

Bingen, J., Serrano, A., y Howard, J. (2003). Linking farmers to markets: different approaches to human capital development. *Food policy*, 28(4), 405-419.

Forero, C., L. E. Orozco, E. Wills y M. Moscoso (2017) Inseguridad y asociatividad en zonas rurales afectadas por la violencia, Capítulo 4, *La Academia y el Proceso de Paz*, Academia Colombiana de Economistas. Bogotá: Colección Controversia.

Forero-Pineda, C., Wills Herrera, E., Andonova, V., Orozco Collazos, L. E., y Pardo, O. (2014). Violence, Insecurity and Hybrid Organisational Forms: A Study in Conflict-Ridden Zones in Colombia. *The Journal of Development Studies*, 50(6), 789-802.

Forero-Pineda, C., Orozco L. E. , Valenzuela A. (2017). Insecurity, Social Capital and Collective Action. Presentado en IASC Conference, Utrecht (The Netherlands), sesión 9H, julio 13.

Gómez, L., D. Aguilar, D., C. Forero, C., L. Orozco, L., E. Wills, E., y M. Moscoso, M. (2015). Asociatividad, desarrollo e inseguridad. Casos del campo colombiano. Universidad de los Andes, Departamento Nacional de Planeación: Colombia, 1ª edición, 42 páginas. ISBN: 978-958-774-288-6

Menard, C. (2006). Hybrid organization of production and distribution. *Revista de Análisis Económico*, 21(2), pp. 25-41.

Orozco, L. E., Forero-Pineda, C., y Wills Herrera, E. (2013). Inseguridad rural y asociatividad. Una investigación sobre violencia y formas organizativas en zonas de conflicto: Bogotá: Ediciones Uniandes.

Orozco, L. E., Forero-Pineda, C. (2017). Intervention of Meso-Organizations in the Integration to the Market of Rural Producers Presentado en IASC Conference, Utrecht (The Netherlands), sesión 5B, julio 13 julio 12.

Ostrom, E., Ahn, T. K., Olivares, C. (2003). A social science perspective on social capital: Social capital and collective action. *Revista Mexicana De Sociología*, 65(1), 155-233.

Wills-Herrera E, Orozco L.E., Forero-Pineda C, Pardo O., Andonova V. (2011) The relationship between perceptions of insecurity, social capital and subjective well-being: Empirical evidences from areas of rural conflict in Colombia. *The Journal of Socio-Economics* 40, pp. 88-96.

Wills, E., Rodriguez, M.A (2017). Capacity to associate, subjective wellbeing and perceptions of insecurity: three key variables to understand sustainability in conflictive rural Colombia. Presentado en 23rd International Conference on Sustainable Development Research, ISDRS, Bogotá-Colombia., ISBN 978-958-774-606-8

Recomendaciones de política

- El Estado central debe estimular a las entidades públicas de carácter regional y a las ONG que tienen presencia en las regiones para que escojan adecuadamente sus programas de intervención.
- Las organizaciones privadas, las entidades públicas y las ONG de ámbito regional deben tener conciencia de su papel en el fortalecimiento de las bases para promover el desarrollo de los productores rurales.
- El posconflicto demanda acompañamiento en los procesos de sustitución de cultivos.
- Los procesos de sustitución de cultivos pueden ser más exitosos en la medida en que las mujeres campesinas las lideren. En las zonas de sustitución de cultivos, las mujeres tenían un mayor interés en la reconstrucción del tejido social y la confianza en la comunidad rural, elementos fundamentales para la acción colectiva.
- La integración de los programas de víctimas con los programas de desarrollo rural de la región debe ser un objetivo fundamental en el diseño de los programas de posconflicto.

Comité editorial

Oscar Alberto Bernal, profesor Escuela de Gobierno
Juan Camilo Cárdenas, decano Facultad de Economía
Darío Maldonado, director de investigaciones Escuela de Gobierno
Jorge Tovar, profesor Facultad de Economía
Hernando Zuleta, director CEDE

En esta edición

Juan Camilo Cárdenas, editor
David Bautista, diagramación

CEDE: <https://economia.uniandes.edu.co/CEDE>

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo:
<https://egob.uniandes.edu.co>



Escuela de Gobierno
Alberto Lleras Camargo

Facultad de Administración

Facultad de Economía

CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico